



História Unisinos

E-ISSN: 2236-1782

efleck@unisinos.br

Universidade do Vale do Rio dos Sinos
Brasil

Bohoslavsky, Ernesto

¿Qué es lo nuevo de la nueva derecha en Chile? Anticomunismo, corporativismo y
neoliberalismo, 1964-1973

História Unisinos, vol. 16, núm. 1, enero-abril, 2012, pp. 5-14

Universidade do Vale do Rio dos Sinos
São Leopoldo, Brasil

Disponível em: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=579866794002>

- Como citar este artigo
- Número completo
- Mais artigos
- Home da revista no Redalyc

redalyc.org

Sistema de Informação Científica

Rede de Revistas Científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal

Projeto acadêmico sem fins lucrativos desenvolvido no âmbito da iniciativa Acesso Aberto

¿Qué es lo nuevo de la nueva derecha en Chile? Anticomunismo, corporativismo y neoliberalismo, 1964-1973

What is new in the new Chilean right-wing? Anti-communism,
Corporatism and Neoliberalism, 1964-1973

Ernesto Bohoslavsky¹
ebohosla@ungs.edu.ar

Resumen. Este artículo intenta mostrar algunas de las prácticas y proyectos políticos desplegados por distintos actores políticos de derecha y de extrema derecha en Chile entre 1964 y el golpe de Estado de 1973. Estos actores manifestaban diferencias ideológicas en sus diagnósticos, estrategias y proyectos políticos. A pesar de ello, las diversas “familias” derechistas consiguieron consolidar un frente social y político anticomunista opositor a la Unidad Popular, que terminó por impugnar al régimen político chileno.

Palabras clave: Chile, anticomunismo, derechas.

Abstract. This article discusses some of the political practices and projects implemented by different right-wing and extreme right-wing actors in Chile between 1964 and the 1973 coup d'état. These actors showed some ideological differences in their political diagnoses, strategies and projects. In spite of this, the various rightist “families” were able to build a strong political and social Anti-communist bloc in opposition to the Unidad Popular government that ended up challenging the Chilean political regime.

Key words: Chile, anti-communism, right wing.

La política chilena en las décadas de 1960 y 1970 concitó mucha atención de sus contemporáneos en diversas partes del mundo, por diversas razones. Para los católicos que habían vivido y disfrutado de los cambios discursivos y litúrgicos producidos por el Concilio Vaticano II, y para quienes compartían la esperanza de la Alianza para el Progreso de que se pudieran promover cambios radicales sin caer en los brazos de Moscú, el gobierno demócrata-cristiano de Eduardo Frei (1964-1970) generó mucha curiosidad y simpatía. Lo propio pasó con la social-democracia europea, que vio en el gobierno de la Unidad Popular (1970-1973) una deseable –o al menos sostenible– experiencia de combinación de reformas de base y mantenimiento de la democracia multipartidaria. Pero también los que tenían más miedos que esperanzas en esos posibles cambios siguieron con atención lo ocurrido en Chile en esos años, convencidos de que

¹ Investigador-docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Investigador del CONICET.

allí se desarrollaba una de las batallas más calientes de la guerra fría. Es por ello que el golpe de Estado liderado por el general Augusto Pinochet Ugarte el 11 de septiembre de 1973 se convirtió en un episodio de repercusión mundial.

En efecto, los testimonios de los contemporáneos y la historiografía coinciden en señalar que en 1973 se produjo un giro en la vida de Chile. No sólo porque por primera vez en casi medio siglo un golpe de Estado desalojó a un presidente democráticamente electo y acabó con la vigencia de la constitución de 1925 y el sistema de partidos que de ella emanaba (Moulian, 2003; Scully, 1992; Yochevsky, 2002). También porque se puso en marcha una economía política radicalmente distinta a la que se venía llevando adelante desde la salida de la Depresión: ya a inicios de la década de 1980 se hacía evidente que esa etapa histórica había quedado atrás (Ramos, 1986; Vergara, 1982). Estos cambios en la estructura política y en la economía de Chile significaron un quiebre histórico en el país. Los actores involucrados en la puesta en marcha de las nuevas reglas de juego (neoliberal en lo económico; autoritario en lo político; conservador en lo constitucional) fueron las Fuerzas Armadas y distintos grupos o familias ideológicas que apoyaron al régimen y le dieron insumos ideológicos e interpretativos para llevar adelante y justificar esos cambios. Algunos historiadores han hablado de una “nueva derecha” chilena (Valdivia Ortiz de Zárate, 2009), surgida a mediados de la década de 1960, y que sería la autora intelectual y promotora de los cambios violentamente introducidos a partir de 1973.

En este artículo intentaré mostrar algunos de los rasgos de esa nueva derecha (muchos de cuyos insumos ideológicos tenían décadas de vida), ofreciendo un marco que permita analizar mejor las relaciones entre las jóvenes y las viejas familias ideológicas chilenas entre el triunfo de Frei en 1964 y el golpe de Estado que derrocó a Allende en 1973. Este artículo defiende la idea de que estamos frente a varios actores (“las derechas”) y no frente a un actor unificado (“la derecha”) dotado de homogeneidad ideológica y coordinación organizativa. En este sentido, no se trata de una “nueva derecha” con tres caras (el gremialismo corporativo, el Partido Nacional y los Chicago boys) sino de distintas familias políticas. Muchas veces esas derechas se encontraron unidas por las ideas y los actores a los que se opusieron (el reformismo demócrata-cristiano, la Unidad Popular) más que por tener las mismas percepciones sobre la realidad. Es por eso que el término “anticomunismo” permite englobar a distintos actores, provenientes de diversas tradiciones, pero convencidos de compartir un mismo enemigo. El hecho de compartir ese mismo enemigo resultó lo suficientemente fuerte en términos ideológicos y simbólicos como para que dejaran de lado las diferencias que tenían entre ellos. Seguimos

aquí a Motta (2002), quien entiende que el anticomunismo tiene como mínimo común denominador al conjunto de nociones y prácticas destinadas principalmente a erradicar o debilitar al comunismo, los comunistas y/o sus ideas, sin que ello signifique que se trata de un actor homogéneo.

Siguiendo a González Cuevas (2000, p. 37), podemos encontrar que las familias políticas derechistas se pueden ordenar no sólo por su contenido ideológico sino por su capacidad para generar hegemonía entre sí. Pueden identificarse, en consecuencia, tres derechas según su poder relativo: por un lado, las derechas *dominantes*, que controlan el grueso del electorado y/o de los recursos políticos e ideológicos, por otro lado las *emergentes*, que suelen ser minoritarias, más radicalizadas, novedosas y desafiantes del *statu quo* dentro de las derechas y, por último, se encuentran las derechas *residuales*, aquellas que ya han vivido el esplendor de su influencia y que se encuentran en franca retirada o descomposición, sea hacia las familias dominantes o las emergentes.

Las derechas chilenas ante el desafío del comunitarismo y el socialismo

Al interior de las derechas chilenas predominaron hasta la década de 1960 los dos viejos partidos nacidos en el siglo XIX: liberales y conservadores. Distintas interpretaciones han mostrado la capacidad de adaptación y de iniciativa que tuvieron liberales y conservadores a lo largo de los primeros sesenta años del siglo XX, expresada tanto en sus muy buenas performances electorales como en su poder para detener o ralentizar la marcha de reformas potencialmente dañinas para los sectores social y económicamente más poderosos (Correa Sutil, 1989, 2005). Cuando la derecha no controlaba el gobierno, se mostró dotada de las herramientas retóricas, políticas e ideológicas para reducir el margen de maniobra de sus rivales en el Ejecutivo (como en el caso de las presidencias de Frente Popular, entre 1938 y 1952, o con la presidencia de Ibáñez, entre 1952 y 1958).

La derecha tradicional retuvo hasta la década de 1960 fuertes posiciones en ambas cámaras gracias al control electoral de sectores importantes de la población rural. Junto con ello, hay que recordar que en 1958 el candidato de la alianza liberal-conservadora, Jorge Alessandri, obtuvo 31,5% de los votos, que le permitieron convertirse en presidente frente al 28,9% del candidato de la izquierda y el 20,7% de la democracia cristiana (PDC). Por entonces, el partido radical, con el 15% de los votos, seguía siendo una pieza clave del juego político-partidario chileno. Después de ello el centro terminó ocupado por el

PDC, con un tono notoriamente más ideológico y reactivo a los acuerdos electorales, lo cual terminó por complicar la formación de mayorías en el parlamento chileno, tal como han mostrado ya numerosas tesis sobre el particular (Moulian, 2003; Scully, 1992).

Esa derecha dominante no echaba mano a las Fuerzas Armadas para llegar al poder: su postura civilista, institucionalista y republicana fue mantenida al menos hasta 1970. No se veían estimulados a derribar un sistema democrático -con el cual se sentían identificados- ni a asumir posturas ideológicas antiparlamentarias y estatistas, demasiado alejadas de sus consuetudinarios pragmatismo, liberalismo económico y conservadurismo católico (Bohoslavsky, 2009, cap. 6; Buchrucker, 2003, p. 7; Correa Sutil, 2005, p. 52; McGee Deutsch, 1999, p. 25; Zuleta Álvarez, 1975, p. 50). De hecho, cuando en 1964 los dirigentes del Partido Conservador y del Partido Liberal temieron el triunfo de la izquierda, no se lanzaron a buscar alianzas con la derecha más radicalizada, sino que le brindaron su apoyo al candidato demócrata-cristiano a la presidencia.

Ese año los dos partidos tradicionales de derecha se enfrentaron a un cuadro político complicado, y sumamente adverso. El gobierno de Alessandri, que los había representado, llegaba agotado al final de su mandato y sin haber resuelto los problemas económicos que había enfrentado. Y para colmo, sin capacidad para tener un candidato electoralmente atractivo. Es por ello que decidieron apoyar al candidato del Partido Demócrata Cristiano, Eduardo Frei Montalva, en las elecciones. Actualmente hay una discusión historiográfica centrada en las razones por las cuales las derechas desistieron en 1964 de presentar un candidato propio y, en cambio, respaldaron sin concesiones una candidatura ajena, y que incluía una plataforma con reforma agraria, nacionalización de las minas de cobre y sindicalización de los trabajadores rurales. Frei tenía un programa electoral que incluía muchas reformas sociales y económicas de base, lo que normalmente quedaba lejos del talante conservador de la derecha. Sin embargo, el apoyo de liberales y conservadores se dio sin condiciones y sin ser resultado de negociaciones abiertas o de transacciones: Frei no modificó su programa ni les ofreció espacios en el futuro gabinete a cambio de ese respaldo. Algunos autores ven allí un suicidio político, otros entienden que el anticomunismo era mucho más intenso que cualquier otra lectura de la realidad: en efecto, a ojos de los liberales y conservadores Frei parecía el único capaz de detener el triunfo del candidato de la izquierda, Salvador Allende. Igual cálculo hizo el gobierno estadounidense, que alimentó financieramente la campaña electoral demócrata-cristiana. Hay quien especula que con ese gesto de apoyo a Frei la derecha estaba convencida de que iba a lograr

que se moderara o se hiciera más tibio el ímpetu reformista del futuro gobierno (Correa Sutil, 2005; Valdivia Ortiz de Zárate, 2009).

Sin embargo, pronto se mostró cuán infundada era esa convicción liberal-conservadora de que era mejor estar dentro que fuera del gobierno para reducir o morigerar el tipo y el nivel de intervención del Estado en la sociedad y la economía. El programa de reformas de Eduardo Frei (la llamada “Revolución en libertad”) implicaba transitar un camino de desarrollo teóricamente alejado y equidistante del capitalismo individualista y del socialismo estatista. La vía “comunitarista” apuntaba a estimular a las organizaciones de la sociedad civil (vecinos, clubes juveniles, centros de madres, gremios) que serían “promovidos” para enfrentar de la mejor manera posible los problemas evidentes de sub-desarrollo y pobreza en Chile: sería la comunidad -y no el Estado- el responsable de incrementar el bienestar de la población y el desarrollo de la economía. Una combinación de “Alianza para el Progreso”, humanismo y Concilio Vaticano II parecía orientar el programa de Frei.

Con guiños de la Iglesia y fondos provenientes de Washington, la presidencia de Frei impulsó una serie de reformas de base, entre las que se contaba en primer lugar la “chilenización del cobre”, el inicio de la reforma agraria y la ampliación de las políticas públicas de salud, vivienda y educación. La “chilenización” del cobre permitió pasar buena parte de las acciones de las compañías mineras al Estado, pero no afectó a la clase dominante chilena ni a sus representantes políticos. Fue con la reforma agraria que la “Revolución en libertad” les generó a liberales y conservadores la convicción de que se habían equivocado. No sólo porque la reforma implicó la abierta sindicalización de los trabajadores rurales y campesinos por primera vez en la historia de Chile, sino porque trajo consigo la expropiación de más de mil latifundios (unas 3.500.000 hectáreas), beneficiando a decenas de miles de pobladores rurales.

La aceptación incondicional de la “Revolución en libertad” significó, en la práctica, el final de la derecha decimonónica, esa institución bicéfala asentada en los partidos Conservador y Liberal y en un tipo de práctica política que tenía mucho de tradicional y de notabiliaro. Su ocaso dio lugar a la emergencia de nuevas fuerzas políticas de derecha. Por un lado, se encontraban las agrupaciones de estudiantes universitarios denominados “gremialistas”, apadrinados por Jaime Guzmán, que propugnaban por el reemplazo de la democracia por un orden inspirado en el régimen franquista, esto es, corporativista, autoritario y tutelado por la Iglesia. Junto a ellos se encontraba el Partido Nacional, de tono reaccionario y nacionalista, que resultó de la fusión de liberales y conservadores. A esas dos fuerzas se le sumaban la capacidad de presión y

las propuestas provenientes de un grupo de economistas y periodistas inspirados por el neoliberalismo: sin ser explícitamente una fuerza partidaria, los economistas formados en la Universidad Católica de Chile, al amparo del acuerdo con la Chicago University, tendían a asimilar con el régimen comunista a cualquier modelo económico que implicara una intervención relevante del Estado en la economía (Rosende, 2007; Valdés, 1995). Estas fuerzas se encontraban vinculadas por un miedo común en 1970, que provenía de la posibilidad de que el candidato de la Unidad Popular triunfara en las elecciones presidenciales. De allí que el anticomunismo se convirtió en el punto de convergencia de distintos grupos políticos, empresariales, religiosos y universitarios por entonces.

En las elecciones de 1970 liberales y conservadores decidieron concurrir solos, abandonando la decisión de 1964 de apoyar a la democracia cristiana. Sin embargo, su candidato fue derrotado por Salvador Allende por un margen estrecho. Éste de la izquierda asumió con el apoyo de los parlamentarios de la democracia cristiana, que lo obligaron a firmar un compromiso de que llevaría adelante las reformas prometidas sin vulnerar el texto constitucional. El programa de reformas de base de la Unidad Popular, la “vía chilena al socialismo”, tenía varias esferas de intervención, entre las que se contaban la transferencia a la propiedad del Estado de áreas consideradas claves (como la minería del cobre y los cordones industriales) así como la aceleración de la reforma agraria iniciada en el gobierno de Frei. El programa económico incluía una mejora de los salarios reales que fuera capaz de estimular un mercado interno deprimido y con capacidad ociosa instalada. Así, el gobierno avanzó en la estatización de empresas sirviéndose de legislación que no había sido usada en décadas, comprando acciones o con la expropiación directa y sin compensaciones, como fue el caso de la minería del cobre. Las compañías mineras Anaconda y Kennecott, de origen norteamericano, fueron respaldadas por Washington, que puso en marcha iniciativas tendientes a desplazar al presidente Allende. La reforma agraria se tornó más rápida, más profunda y más descontrolada. Los campesinos no esperaban a la resolución oficial para ocupar las tierras, y los terratenientes (y no sólo ellos) resolvieron defender su propiedad echando mano a las armas.

El proceso desató un espiral inflacionario en buena medida a causa de la emisión y de la expansión del consumo de los sectores más pobres de la sociedad. Mercado negro, crecimiento de la deuda externa, control de precios y racionamiento de los productos básicos son algunas de las postales de la segunda mitad del gobierno de la Unidad Popular. Las audaces reformas sociales y económicas encaradas por la presidencia de Salvador Allende confirmaron muchas de las anticipaciones y miedos de las fuerzas de derecha. No

faltó quien denunciara que se vivían los prolegómenos de la instalación de un régimen de estilo soviético o cubano (Buchrucker, 2003, p. 7), idea que parecía confirmarse por los dichos y prácticas de grupos de extrema izquierda a los que el gobierno no quería (y quizás no podía) controlar. En diciembre de 1971 Fidel Castro se quedó en Chile durante tres semanas, lo cual generó en muchos hombres de la derecha la convicción de que la vía chilena al socialismo no era algo distinto a la vía cubana al socialismo.

El marco político general se fue deteriorando a lo largo de 1972, en que arreciaron actos de violencia de Patria y Libertad, así como ocupaciones de tierras y plantas fabriles por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Aparecieron las actividades de terrorismo anticomunista, que nunca habían tenido un desarrollo relevante en la política nacional. El accionar de las bandas de Patria y Libertad, así como los atentados (primero al general Schneider en 1970), dan cuenta de la intensidad de esas prácticas paramilitares. En octubre de 1972 un *lockout* de propietarios de camiones, al que no fue ajeno dinero de la CIA, complicó aún más la situación, de profundo enfrentamiento político y social. Power (2009) ha mostrado cómo mujeres de distintos sectores sociales se movilizaron, militaron y participaron en defensa de representaciones conservadoras sobre los géneros.

La polarización socio-política se profundizó en 1973. El proyecto de creación de la Escuela Nacional Unificada fue denunciado como un mecanismo tendiente a imponer el totalitarismo a los niños, y devino en enfrentamientos callejeros entre estudiantes izquierdistas y derechistas a lo largo del año. Diversos grupos de civiles comenzaron a presionar sobre las Fuerzas Armadas para que intervinieran en la vida política, cosa que ocurrió en junio. Las charlas y sondeos de opinión entre el presidente y la democracia cristiana en 1973 no prosperaron, entre otras razones por oposición de Frei y de los sectores más radicalizados de la Unidad Popular. En agosto de ese año la Cámara de Diputados lanzó formalmente la acusación al gobierno de haber violado reiteradamente la Constitución a efectos de conducir al país hacia un régimen totalitario. El 11 de septiembre un golpe de Estado con presencia del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y Carabineros desplazó al gobierno de la Unidad Popular e instaló una dictadura que se mantuvo por casi dos décadas.

El Partido Nacional: ¿una derecha para salvar a la democracia del marxismo?

Según ha señalado Cuadra (1992, p. 43), la puesta en marcha del plan de “Revolución en libertad” del

presidente Frei primero, y posteriormente de la “vía chilena al socialismo” del presidente Allende constituyeron un “factor aglutinador, decantador y precipitador de lo que será el resurgimiento ya no sólo cultural sino político y social de la derecha”. Pero, ¿se trató realmente de un resurgimiento?, ¿fue una resurrección de la misma derecha o apareció algo nuevo? Según Valdivia Ortiz de Zárate (2009, p. 32), debe hablarse de una nueva derecha, que pasó a la ofensiva, que recuperó el valor de la política, que tuvo nuevas estrategias de acción para obtener el poder del Estado, y que ofreció proyectos de sociedad y de Estado radicalmente diferenciados de los que impulsaban tanto el comunitarismo demócrata-cristiano como el marxismo.

En las elecciones parlamentarias de 1961, conservadores y liberales seguían sumando cerca del 30% de los votos, pero en 1965, la última vez que ambos partidos concurren por separado a las urnas, no llegaron ni al 13%. En ese contexto es que dirigentes del conservadurismo y del liberalismo decidieron fusionar sus fuerzas en un nuevo partido, al que dieron en llamar Nacional. En el nuevo partido, creado en 1966, se podían reconocer distintas familias políticas: no sólo los liberales y conservadores sino también grupos nacionalistas y de cierta tonalidad antiliberal, como fue el caso de Sergio Onofre Jarpa, proveniente del Partido Acción Nacional. Varios de ellos terminaron constituyendo parte de los gabinetes de la dictadura a partir de 1973, momento en el que se dieron a la tarea de legitimar la existencia de una tradición nacionalista chilena (Campos Menéndez, 1974).

Fue en esos primeros años de la década de 1970 que dirigentes políticos del conservadurismo chileno establecieron diálogos y coincidencias con aquellos otros provenientes de corrientes nacionalistas: su encuentro había sido dificultoso en las décadas anteriores (Fariña Vicuña, 1990; Valdivia Ortiz de Zárate, 1995b, 1995a). Hasta entonces, el éxito electoral de la derecha tradicional había dejado muy poco espacio para el accionar de ideologías anti-liberales y en general de corrientes de ultraderecha (Burnett, 1970, p. 8; Etchepare y Stewart, 1995, p. 590; Ramírez Necochea, 1978, p. 8; Valdivia Ortiz de Zárate, 1995b, p. 47-48). Es por eso que la extrema derecha se mantuvo como una tradición residual y testimonial, puesto que le faltaron apoyos que resultaban decisivos para lograr su ascenso al poder: no encontraron guños de fuerzas conservadoras atemorizadas, del Ejército, de los gobiernos (salvo el de Ibáñez en la década de 1950), de las clases altas y menos de los sectores populares (Arriagada Herrera, 1986; Etchepare y Stewart, 1995, p. 589). Esa situación sólo se modificó a finales de la década de 1960 y durante el gobierno de la Unidad Popular, momento en el que figuras y agrupaciones de tono abiertamente anti-liberal, nacionalista y autoritario fueron copando el

espacio político de la derecha, desplazando o uniéndose a los sectores conservadores. El disparador de este cambio fue la merma electoral de la década de 1960 y sobre todo la posibilidad de que Salvador Allende accediera a la presidencia, tal como ocurrió en 1970.

En el Partido Nacional convergieron las familias conservadoras con aquellas otras de tradición nacionalista, con sensibilidad ibañista, más acostumbradas a la conspiración y al coqueteo con militares que a la acción política partidaria. Lejos de ser un manotazo de ahogado para detener su merma electoral, algunos analistas han planteado que la creación del Partido Nacional fue un esfuerzo serio y de largo aliento tendiente a modernizar y adecuar las estructuras partidarias a un contexto de ampliación explosiva del padrón electoral, movilización política intensificada y pérdida del liderazgo social (Collier y Sater, 1998, p. 276; Valdivia Ortiz de Zárate, 2009). Su tono no era pesimista sino que expresaba una convicción de que el juego político electoral le iba a permitir retomar el control del poder ejecutivo o al menos impedir que la izquierda impusiera su agenda más radical. En 1971 el senador Francisco Bulnes expresaba su certeza de que esa derecha parlamentaria contaba todavía con un fuerte respaldo electoral.

En todas las naciones del mundo libre, y especialmente en las más progresistas, existen partidos grandes, generalmente victoriosos, que encarnan, con las modalidades propias de cada pueblo, los mismos principios básicos, las mismas aspiraciones fundamentales, el mismo concepto del Estado y de la persona humana, que sustenta el Partido Nacional [...] Se han buscado muchas explicaciones para negar al Partido Nacional lo que en verdad es una fuerza vital que perdurará mientras perdura la democracia en Chile. Una de las explicaciones fue que nuestros votos provendrían solamente del poderío de los latifundistas y de la llamada “derecha económica”. Pero los latifundios han desaparecido o están en trance de desaparecer, sus dueños están empobrecidos y perseguidos, y nuestros votos permanecen, con tendencia a aumentar en las ciudades y en las zonas más azotadas por la Reforma Agraria (Bulnes, 1971, p. 14-15).

En términos de capacidad electoral el Partido Nacional ocupó un lugar relevante, con un pico en la campaña presidencial de 1970, cuando arañó el triunfo. Fuera de esa elección, recibía entre 1/6 y 1/5 del total de votos emitidos, un porcentaje superior a los que recibieron los candidatos liberales y conservadores en las elecciones de 1965, pero alejado a los que se habían registrado décadas atrás.

El Partido Nacional encontró en 1971 un interlocutor inesperado en la democracia cristiana. Ésta había

Tabla 1. Elecciones en Chile (1967-1973).**Table 1.** Elections in Chile (1967-1973).

	1967 (M)	1969 (S)	1969 (D)	1970 (P)	1971 (M)	1973 (S)	1973 (D)
Partido Nacional	14,3%	16,43%	20,60%	34.9%	18,41%	11,13%	20,83%
Democracia Cristiana	35,6%	32,71%	30,72%	27.8%	26,15%	36,18%	28,13%
Partido Radical	16,1%	17,48%	13,44%	36,6%	8,16%	5,96%	7,10%
Partido Socialista	13,9%	11,43%	12,62%		22,67%	19,74%	18,26%
Partido Comunista	14,7%	15,24%	16,42%		17,11%	18,87%	16,22%

Nota: Tipo de elección: (M) Municipio - (S) Senadores - (D) Diputados - (P) Presidente

manifestado inicialmente sus coincidencias con el programa de la Unidad Popular, y había apoyado a Allende en la votación parlamentaria para nombrarlo presidente. Sin embargo, cuando en junio de ese año fue asesinado Edmundo Pérez Zujovic, exministro demócrata-cristiano por un grupo de izquierda extrema, optó por dejar de lado las conversaciones con el gobierno y las retomó con la derecha. Con el Partido Nacional realizaron acusaciones contra los ministros del gobierno y establecieron acuerdos electorales para apoyarse mutuamente en 1972. En las elecciones legislativas de marzo de 1973 la DC y el PN se cobijaron en la Confederación de la Democracia, que reunió 54% de los sufragios. Un número impactante, pero alejado de los 2/3 que se necesitaban para vehicular la destitución del presidente por acusación del Congreso. Parlamentarios demócrata-cristianos y nacionales impulsaron una reforma constitucional que finalmente fue aprobada en junio de 1973, que establecía garantías para los propietarios de hasta 40 hectáreas de tierra, así como para la propiedad privada en general. El desafío de Allende a esta medida le dio a la derecha el argumento para sostener que el presidente estaba actuando fuera de la legalidad y que había incumplido con su compromiso al momento de asumir.

Si el Partido Nacional fue el más relevante electoralmente entre las familias derechistas, su hegemonía en el campo de las ideas se mostró mucho más discutida y puesta en tela de juicio. En efecto, no faltaron promotores de salidas extra-democráticas al conjunto de desafíos sociales, políticos y constitucionales generados por la puesta en marcha de la agenda de la Unidad Popular (Bohoslavsky, 2011). Exaltación del autoritarismo, repudio a la democracia como régimen de gobierno, elitismo y catolicismo se conjugaban en una serie de ideas tendientes a convencer a los hombres de la derecha tradicional y sobre todo de las Fuerzas Armadas de que era necesario dar por terminada la experiencia de la Unidad Popular. A continuación se exponen algunas de esas expresiones.

Gremialismo y autoritarismo: ¿una derecha para salvar a Chile de la democracia y del marxismo?

Entre los que lanzaron abiertamente esa convocatoria a derrumbar el orden político se encontraban varios hombres y grupos inspirados por un catolicismo reaccionario y anti-conciliar, como el sacerdote Osvaldo Lira o las revistas *Fiducia*, *Portada* y *Tizona*. *Fiducia* estaba vinculada a la “Sociedad Chilena de Defensa de la Tradición, la Familia y la Propiedad”, filial local de la fundada por Plinio Corrêa de Oliveira en Brasil (Moncada Durruti, 2006, p. 36). Editada en Valparaíso, *Tizona* desplegó a inicios de la década de 1970 argumentaciones filosóficas e ideológicas para legitimar la intervención de las Fuerzas Armadas en la política. Alrededor de esa publicación se concentraron profesionales, universitarios, pequeños y medianos empresarios y sobre todo hombres de la Armada (Ramírez Necochea, 1978, p. 27). Mientras que en el Partido Nacional se postulaba la necesidad de unir fuerzas con la democracia cristiana para impedir la profundización de la “vía chilena al socialismo”, el editorial de *Tizona* sostenía:

Un error fatal sería que en estos momentos se confiase toda la defensa de la patria contra el comunismo a los partidos democráticos. Cualquiera puede comprobar que la oposición parlamentaria llevada a cabo por ellos transcurre paralela a las medidas de gobierno que nos han llevado al desastre económico y que constituyen el principal medio para llevarnos a la tiranía socialista [...] Son los gremios, ya lo hemos dicho muchísimas veces, y no los partidos democráticos las auténticas fortalezas de la resistencia al marxismo (Editorial, 1972, p. 3).

La diatriba anti-partidos de *Tizona* se resumía en la idea de que una mejor combinación de agrupaciones

políticas no ofrecería ninguna salida a la crisis chilena. Según expresaba el editorial, *Tizona*

no se identifica con absolutamente ningún partido político, y en cierto modo, los ataca a todos. Por supuesto que unos merecen más que otros, pero es el principio mismo de la política en base a partidos, es decir, la política liberal, la que está errada. Todo partido político, por la dialéctica del sistema, es más o menos totalitario (Editorial, 1972, p. 2).

Ni los partidos políticos resultaban necesarios ni su ausencia conducía a la tiranía, de lo cual era ejemplo suficiente el orden portaliano del siglo XIX. Cada partido tiene “su” verdad, sostenía *Tizona*, lo cual constituía *per se* un grosero error teológico, puesto que

existe la verdad objetiva, inteligible para todo el que quiere descubrirla y que no depende, para ser lo que es, de lo que nosotros pensemos de ella [...] Por eso, al juzgar los hechos políticos no nos fundamos sólo en el derecho a emitir una opinión, sino en la objetividad de la ley natural y de la historia, que es lo único sobre lo cual puede establecerse un criterio político veraz y moralmente legítimo (Editorial, 1972, p. 2).

Uno de los articulistas de la revista expuso abiertamente la necesidad de instaurar una dictadura, que no sólo trajera alivio temporario sino que fuera capaz de instaurar un nuevo orden permanente, depurado de anteriores males morales, culturales y políticos que se entendían surgidos con la Constitución de 1925, con la guerra civil de 1891 o con el ingreso de las masas a la política. Según Widow,

[I]a autoridad debe ser necesariamente fuerte [...] no puede excluir, a riesgo de negar el deber moral que supone su ejercicio, los medios violentos para prevalecer cuando se le resiste sin razón fundada en el bien común. La restauración de la autoridad política exige, para los primeros tiempos en que no se hayan trazado las líneas constitutivas de un auténtico Estado de derecho, una dictadura. [...] Una dictadura que se dedique a remediar lo urgente, sí, pero con la vista puesta en una finalidad que va más allá de lo urgente [...] Debe tener un horizonte político y unas intenciones que impliquen la superación de sí misma como situación concreta política pues de lo contrario puede transformarse en causa del mal que por ella se quiere eliminar (Widow, 1972, p. 5).

Aquello a lo que claramente podemos rotular como una derecha emergente en este período es el Movimiento

Gremialista. Con ese nombre se conoció primero a una corriente estudiantil en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Chile, pero que después de 1967 se fue extendiendo a diversas corporaciones y agrupaciones como comerciantes, profesionales, camioneros, etc. (Moncada Durruti, 2006, p. 49). El gremialismo consiguió en 1968 el control de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica al arrebatárselo a los jóvenes demócrata-cristianos (Collier y Sater, 1998, p. 277).

La figura clave del gremialismo fue Jaime Guzmán Errázuriz. Proveniente de encumbrados círculos sociales, Guzmán fue un jurista y docente universitario que se inició a la vida política mientras era estudiante en la Universidad Católica: su formación política le debe mucho a la teología del ya mencionado Osvaldo Lira y a su fascinación con España y el orden tardo-franquista. En él encontraba alguna inspiración para su propuesta de instaurar un orden social y político de naturaleza corporativa, compatible con la promoción del individualismo de mercado. Guzmán ingresó a la vida política en la universidad, oponiéndose a la vía comunitarista lanzada por el gobierno de la democracia cristiana, especialmente a su proyecto de reforma agraria. Durante el gobierno de la Unidad Popular, Guzmán fue un incansable opositor, que se vinculó con Patria y Libertad para brindar capacitación política a sus miembros, y se sirvió del espacio disponible en la televisión y en la prensa para ofrecer argumentos contra las reformas del presidente Allende. Tras el golpe de Estado de 1973 asesoró a la Junta Militar y fue uno de los redactores de la “Declaración de Principios” que las Fuerzas Armadas brindaron al año siguiente para legitimar el camino tomado y las vías a desarrollar a futuro. Posteriormente, Guzmán formó parte del grupo de juristas a los que la Junta Militar les solicitó que elaboraran un nuevo proyecto de constitución política para Chile, que brindara las bases para la futura democracia. Ese proyecto se transformó en la Constitución aprobada en 1980, que expresa buena parte de las ideas de Guzmán sobre autoridad, Estado y participación política (Cristi, 2000; Moncada Durruti, 2006; Correa Sutil, 2008, p. 477 ss.).

Según ha analizado Moncada Durruti (2006, p. 36-38), la postura de Guzmán sobre la propiedad privada terminó coincidiendo con la del liberalismo, pero partiendo de premisas bien distintas. En la mirada de Guzmán el hombre es ontológicamente previo a la sociedad y al Estado, entendido éste como un ser relacional, segundo e histórico. La finalidad del Estado es, entonces, promover el bien individual. El concepto con el que neoliberales y gremialistas van a encontrar un área de mutuos intereses es “subsidiarismo estatal”. Esa idea innovadora de la “nueva derecha” en realidad tenía bastante tiempo de vida. Había sido adelantada en la década de 1930 por el intelectual

católico reaccionario Jaime Eyzaguirre, director de la revista *Estudios* (Catalán, 1985). Según esta concepción, el Estado debía alentar las formas “naturales” de asociación (la familia, el gremio, la ciudad, etc.) en lugar de las entidades representativas organizadas según criterios ideológicos, esto es, los partidos. En la década de 1950 la rama anticomunista del Partido Conservador (llamado Tradicionalista) había expresado nociones similares. En el programa de gobierno que llevó como plataforma electoral planteó como ejes de su futura gestión la subsidiariedad, diversificación, privatización y descentralización del sistema educativo:

La acción del Estado ha de dirigirse de preferencia: a) a amparar y proteger a la Iglesia, la Familia y a los establecimientos particulares de educación, en el libre ejercicio de sus respectivas misiones docentes, y sólo ha de reemplazar a la labor educativa de la familia cuando ésta se encuentre imposibilitada para realizar sus fines; b) a estimular y alentar la iniciativa privada, asegurando la mayor difusión de la cultura elemental y la existencia de establecimientos de educación industrial, agrícola, de artes y oficios y de comercio, de acuerdo con las necesidades nacionales y las circunstancias regionales, c) a la descentralización de los servicios educacionales ya que así se facilita la adaptación de la enseñanza a las circunstancias regionales (Partido Conservador Tradicionalista, 1950, p. 26).

De acuerdo a esta noción, el Estado debe limitarse a suplir la iniciativa individual y comunitaria: no debe asumir funciones que por su propia naturaleza pueden ser llevadas adelante por organismos intermedios (en la lectura gremialista) o por el mercado (en la lectura neoliberal). Como el mercado y las asociaciones intermedias tienen funciones consideradas “naturales”, el Estado está llamado a intervenir sólo cuando sea evidente que esas actividades deben ser subsidiadas (Ruiz, 1992, p. 32). El corporativismo aparece como una defensa de la autonomía de las instituciones y los cuerpos intermedios (familias, mercado, universidad, etc.) frente a las exigencias y relatos totalizantes (principal, mas no exclusivamente el marxismo).

Portada se encargó de promover la noción de subsidiarismo estatal. En 1969 un analista planteaba que en el mundo existían dos doctrinas frente a las que los hombres tenían que elegir: una era el estatismo, votada por los chilenos desde 1920, que sostiene que “la autoridad pública es el único sujeto de derechos en la nación, siendo la comunidad o los particulares solamente sujetos de deberes frente a él”. De esta manera, comunistas, socialistas, radicales, demócrata-cristianos y conservadores parecían

compartir más de lo que suponían y estaban dispuestos a aceptar. Frente a esta deificación del Estado, había otra doctrina, “intuida y sentida por muchos, antes que intelectualmente perfilada y fundamentada entre nosotros”, el “subsidiarismo estatal”. Éste consiste en que

el Estado tiene el principal deber de proteger y fomentar las actividades de la comunidad y de los particulares para lograr el bien común, absteniéndose de realizar dichas actividades, salvo cuando aquella o estos no puedan o no quieran realizarla (Tagle Martínez, 1969, p. 15).

Según se postulaba, un Estado mínimo permitiría maximizar el libre accionar de los hombres y de los grupos sociales. La idea de subsidiariedad combina, por un lado, el respeto al ordenamiento social espontáneo (como lo entendía von Hayek) con el reclamo corporativo de reducción de la intervención estatal en la economía y en las instituciones (Ruiz, 1992, p. 34). El debate político debía mantenerse acotado, de baja intensidad, y no debía afectar el funcionamiento “natural” de las familias, el mercado, las regiones y las asociaciones libres. Una vida política monopolizada por partidos y una vida social opacada y asfixiada por la política y el Estado generarían miedo a disenter, expresaba el propio Jaime Guzmán (1969), con un argumento que tenía tanto de liberal como de católico. El subsidiarismo permitiría quitarles a los políticos en general –y al parlamento en particular– el monopolio de la vida política. Eso le devolvería protagonismo histórico a “las fuerzas vivas de la nación” y sacaría al país de “una situación ridícula e irreal, que es fuente de constante violencia” (Editorial, 1970, p. 4). Por ello el tono marcadamente conservador que tiene la política en el Movimiento Gremial y en la posterior constitución de 1980, en la cual el miedo a un desborde de la participación, a un incremento de la política a expensas de otras esferas, parece moldear mucho de su espíritu.

Conclusiones

¿Qué compartían los dirigentes conservadores y nacionalistas del Partido Nacional con los gremialistas de la Universidad Católica y los sectores de las Fuerzas Armadas que finalmente dieron el golpe de Estado? No por conocida la respuesta debe dejar de ser dicha: el anti-comunismo. De hecho, el anticomunismo fue una fuerza política central del siglo XX en Chile. Su carácter reactivo y defensivo no necesariamente conduce a negar su fuerza y capacidad movilizadora en general y menos en ese país. Pero junto con reconocer su peso en la política de Chile entre 1919 y 1989, también hay que hacer notar su gran

heterogeneidad y su notable dinamismo a lo largo del tiempo. El anticomunismo tuvo diversas olas en Chile, momentos en los cuales se convirtió en una notable herramienta de movilización y de interpretación política: lo fue en 1919 y 1920 (Bohoslavsky, 2009, cap. 2; Guzmán Concha, 2001; Torres-Dujisin, 1985, p. 70-94), a mediados de la década de 1930 (Moulian y Torres Dujisin, 1986, 1988), en 1946 (Bohoslavsky, 2009; Huneeus, 2009), en 1964 y así se mantuvo durante el gobierno de la Unidad Popular (Peñaloza Palma, 2001) y a lo largo de la dictadura (Rojas-Mix, 2007).

Había mucha diversidad entre los argumentos usados para desprestigiar al comunismo, así como entre las estrategias utilizadas para cumplir con ese propósito. Así, por ejemplo, las voces del anticomunismo liberal ponían el acento en que el Estado soviético ahogaba la iniciativa y la libertad de los individuos, producía empresas públicas ineficientes y burocráticas, promovía el control de los pensamientos e impedía el funcionamiento de la democracia multipartidaria. Los anticomunistas de inspiración católica, en cambio, no criticaban esa presencia del Estado en la economía, pero sí ponían el acento en el vacío moral al que supuestamente conducía el ateísmo comunista y el atropello que sufría la Iglesia en los países del Este europeo. El anticomunismo orientado por la Doctrina de la Seguridad Nacional postulaba que el propósito de la izquierda era promover la lucha de clases para debilitar la concordia nacional, y de esa manera facilitar la penetración ideológica y luego militar de la Unión Soviética o de guerrillas amparadas, inspiradas o financiadas por Moscú, Pekín o La Habana: en su perspectiva, el problema de la democracia aparecía subsumido a la lógica de la guerra fría. Múltiples e incluso enfrentados argumentos que en algunos casos produjeron algunos choques y tensiones entre las derechas, pero que en líneas generales no impidieron la conformación de bloques unificados por su común aversión a lo que daban en llamar “comunismo”.

El anticomunismo, pero sobre todo la anti-política, eran las ideas-fuerza de la nueva Junta de Gobierno, dirigida por el general Pinochet. Para entonces no se trataba de salvar a la democracia de sus enemigos, como se había señalado en 1946 cuando se ilegalizó al Partido Comunista con una ley llamada, precisamente, “de defensa de la democracia” (Huneeus, 2009). En 1973 el objetivo abierto era abandonar a la democracia (al menos temporalmente) como régimen político. En efecto, la crítica anticomunista desarrollada en las revistas de extrema derecha como *Fiducia*, *Portada* o *Tizona* durante las décadas de 1960 y 1970 formaba parte de una impugnación mayor a la democracia multipartidaria. En este sentido, ese anticomunismo puede ser entendido más como reclamo anti-político o anti-partidos, lo cual constituía un evidente punto de

intersección entre el neoliberalismo, el corporativismo y el nacionalismo. El primero por entender que la democracia conducía a la demagogia y gastos públicos innecesarios, improductivos y deformantes de la economía. El segundo por partir de la idea de que los partidos pugnan por controlar la totalidad de la vida social y son renuentes a aceptar la existencia de lógicas, tradiciones y prácticas que son pre-estatales o al menos para-estatales. El tercero porque concibe a los partidos políticos como fuerzas que disgregan la unidad que debería regir entre los chilenos y que, por lo tanto, debilitan peligrosamente el principio de autoridad y la defensa frente a los enemigos externos.

Referencias

- ARRIAGADA HERRERA, G. 1986. *El pensamiento político de los militares*. Santiago de Chile, Aconcagua, 226 p.
- BOHOSLAVSKY, E. 2009. *El complot patagónico: nación, conspiracionismo y violencia en el sur de Argentina y Chile, siglos XIX y XX*. Buenos Aires, Prometeo, 290 p.
- BOHOSLAVSKY, E. 2011. Del anticomunismo de los antiguos comparado con el de los modernos: razones y pasiones de las derechas chilenas (1932-1973). *Observatorio Latinoamericano*, 8:48-64.
- BUCHRUCKER, C. 2003. Identidades nacionales y cultura política antidemocrática: trayectorias históricas del Cono Sur en el siglo XX. In: CONGRESO “LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES NACIONALES EN EL MUNDO HISPÁNICO”, Valencia. [mimeo].
- BULNES, F. 1971. La votación del P. Nacional y la ceguera marxista. *Revista Qué Pasa*, 1, 15 de abr.
- BURNETT, B. 1970. *Political groups in Chile: The dialogue between order and change*. Austin, Institute of Latin American Studies by University of Texas Press, 333 p.
- CAMPOS MENÉNDEZ, E. (ed.). 1974. *Pensamiento nacionalista*. Santiago de Chile, Editora Nacional Gabriela Mistral, 330 p.
- CATALÁN, G. 1985. Notas sobre proyectos autoritarios corporativos en Chile: la revista Estudios, 1933-38. In: J.J BRUNNER; G. CATALÁN (eds.), *Cinco estudios sobre cultura y sociedad*. Santiago de Chile, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, p. 177-259.
- COLLIER, S.; SATER, W. 1998. *Historia de Chile, 1808-1994*. Madrid, Cambridge University Press, 359 p.
- CORREA SUTIL, S. 1989. La derecha en Chile contemporáneo: la pérdida del control estatal. *Revista de Ciencia Política*, Santiago, XI(1):5-19.
- CORREA SUTIL, S. 2005. *Con las riendas del poder: la derecha chilena en el siglo XX*. Santiago, Editorial Sudamericana, 313 p.
- CORREA SUTIL, S. 2008. El corporativismo como expresión política del socialcristianismo. *Teología y Vida*, XLIX:467-481.
- CRISTI, R. 2000. *El pensamiento político de Jaime Guzmán: autoridad y libertad*. Santiago, LOM Ediciones, 223 p.
- CUADRA, F.J. 1992. Aspectos del pensamiento de la derecha en Chile. In: C. RUIZ; F.J. CUADRA (eds.), *El discurso de la derecha chilena*. Santiago, CERC-CESOC, p. 41-60.
- EDITORIAL. 1970. Alessandri y el alessandrismo. *Portada*, 10, p. 4.
- EDITORIAL. 1972. Tizona y los partidos políticos. *Tizona*, 35, septiembre, p. 2.

- ETCHEPARE, J.A.; STEWART, H. 1995. Nazism in Chile: A particular type of Fascism in South America. *Journal of Contemporary History*, 30(4):577-605.
<http://dx.doi.org/10.1177/002200949503000402>
- FARIÑA VICUÑA, C. 1990. El pensamiento corporativo en las revistas *Estanquero* (1946-1955) y *Política y Espíritu* (1945-1975). *Revista de Ciencia Política*, XIII(1-2):119-142.
- GONZÁLEZ CUEVAS, P.C. 2000. *Historia de las derechas españolas: de la ilustración a nuestros días*. Madrid, Biblioteca Nueva, 525 p.
- GUZMÁN, J. 1969. El miedo: síntoma de la realidad político-social chilena. *Portada*, 2 de febrero, p. 5.
- GUZMÁN CONCHA, C. 2001. Discurso(s) de la elite sobre Arturo Alessandri Palma en la campaña presidencial de 1920: prensa y politización de la cuestión social. *Anuario de Postgrado*, 4:215-244.
- HUNEEUS, C. 2009. *La guerra fría chilena: Gabriel González Videla y la ley maldita*. Santiago, Debate, 406 p.
- McGEE DEUTSCH, S. 1999. *Las Derechas: the extreme right in Argentina, Brazil, and Chile, 1890-1939*. Stanford, Stanford University Press, 512 p.
- MONCADA DURRUTI, B. 2006. *Jaime Guzmán: una democracia contrarrevolucionaria: el político de 1964 a 1980*. Santiago, USTRIL Editores, 273 p.
- MOTTA, R.P.S. 2002. *Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil, 1917-1964*. São Paulo, Editora Perspectiva/FAPESP, 297 p.
- MOULIAN, T. 2003. El sistema de partidos en Chile. In: M. CAVAROZZI; J.M. ABAL MEDINA (eds.), *El asedio a la política: los partidos latinoamericanos en la era neoliberal*. Rosario, Homo Sapiens/Fundación Konrad Adenauer, p. 241-257.
- MOULIAN, T.; TORRES DUJISIN, I. 1986. *Las candidaturas presidenciales de la derecha: Ross e Ibáñez*. Santiago, FLACSO, 242 p.
- MOULIAN, T.; TORRES DUJISIN, I. 1988. *Discusiones entre honra-bles: las candidaturas presidenciales de la derecha entre 1938 y 1946*. Santiago, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 341 p.
- PARTIDO CONSERVADOR TRADICIONALISTA. 1950. *Convención general del Partido Conservador Tradicionalista que se celebrará los días 12, 13, 14 y 15 de agosto de 1950 en Santiago*. Santiago, Imprenta Chile, 47 p.
- PEÑALOZA PALMA, C. 2001. La campaña del terror de 1970: antiguos y nuevos temores. *Anuario de Posgrado de la Universidad de Chile*, 4:301-322.
- POWER, M. 2009. *La mujer de derecha: el poder femenino y la lucha contra Salvador Allende, 1964-1973*. Santiago, Centro Barros Arana, 318 p.
- RAMÍREZ NECOCHEA, H. 1978. El fascismo en la evolución política de Chile hasta 1970. *Araucaria de Chile*, 1(1):13-15.
- RAMOS, J.R. 1986. *Neoconservative economics in the southern cone of Latin America, 1973-1983*. Baltimore, Johns Hopkins University Press, 200 p.
- ROJAS-MIX, M. 2007. *El Dios de Pinochet: fisonomía del fascismo iberoamericano*. Buenos Aires, Prometeo Libros, 250 p.
- ROSENDE, F. (ed.). 2007. *La escuela de Chicago: una mirada histórica a 50 años del convenio Chicago/Universidad Católica. Ensayos en honor a Arnold C. Harberger*. Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 337 p.
- RUIZ, C. 1992. El conservantismo como ideología: corporativismo y neo-liberalismo en las revistas teóricas de la derecha. In: R. CRISTI; C. RUIZ, (eds.), *El pensamiento conservador en Chile: seis ensayos*. Santiago, Editorial Universitaria, p. 103-123.
- SCULLY, T. 1992. *Rethinking the center: Party politics in nineteenth and twentieth-century Chile*. Stanford, Stanford University Press, 287 p.
- TAGLE MARTÍNEZ, H. 1969. Opciones políticas. *Portada*, 2 de febrero, p. 15.
- TORRES-DUJISIN, I. 1985. *Estudio de la mentalidad y pensamiento político de la elite en el año 1919, a través de la prensa en Santiago*. Santiago, Chile. Tesis de Licenciatura. Universidad de Chile, 185 p.
- VALDÉS, J.G. 1995. *Pinochet's economists: The Chicago School in Chile*. Cambridge/New York, Cambridge University Press, 334 p.
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V. 1995a. *Nacionalismo e ibañismo*. Santiago, Universidad Católica Blas Cañas, 73 p.
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V. 1995b. *El nacionalismo chileno en los años del Frente Popular (1938-1952)*. Santiago, Universidad Católica Blas Cañas, 51 p.
- VALDIVIA ORTIZ DE ZÁRATE, V. 2009. *Nacionales y gremiales: el "parto" de la nueva derecha política chilena*. Santiago, Lom Ediciones, 420 p.
- VERGARA, P. 1982. Las transformaciones del Estado chileno bajo el régimen militar. *Revista Mexicana de Sociología*, XLIV(2):65-104.
- WIDOW, J.A. 1972. La reconstrucción política. *Tizona*, 35, septiembre, p. 5.
- YOCELEVZKY, R. 2002. *Chile, partidos políticos, democracia y dictadura 1970-1990*. Santiago, Fondo de Cultura Económica, 311 p.
- ZULETA ÁLVAREZ, E. 1975. *El nacionalismo argentino*. Buenos Aires, Ediciones La Bastilla, tomo I, 414 p.

Submetido: 08/03/2012

Aceito: 03/04/2012